



## Cámara Federal de Casación Penal

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

Registro nro.: 518/23

///la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores, Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Daniel Antonio Petrone, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por el secretario de cámara actuante, con el objeto de dictar sentencia en la causa **CPE 1058/2015/T01/CFC6** del registro de esta Sala, caratulada **"VERÓN, Gabina Sofía y otros/ recurso de casación"**. Representa al Ministerio Público Fiscal el Dr. Javier Augusto De Luca; en tanto que los doctores Matías Alejo Gentile Brezigar y Patricia Alejandra Fernández -con el patrocinio de la Dra. Aixa Freya Morales- hacen lo propio respecto de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-. Asisten técnicamente a Nelson Alejandro Sánchez Anterino y Gabina Sofía Verón, los defensores particulares, Dres. Federico Becerra y Clara Muhlenkamp.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Juan Carlos Gemignani, Daniel Antonio Petrone y doctor Mariano Hernán Borinsky.

### **VISTOS Y CONSIDERANDO:**

El señor juez **doctor Juan Carlos Gemignani** dijo:

### **PRIMERO:**

**1.** Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por los apoderados de



la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, doctores Patricia Alejandra Fernández y Matías Alejo Gentile Brezigar, contra la resolución dictada el 30 de agosto de 2022 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 2 de esta ciudad -integrado en forma unipersonal- que tuvo por apartada a esa parte en su rol de querellante.

2. El recurso fue concedido el 14 de septiembre de 2022 y, radicada la causa en esta instancia, la impugnación fue mantenida.

3. Los recurrentes encauzaron sus críticas por la vía de lo dispuesto en ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, al considerar que la sentencia recurrida ha inobservado la norma sustantiva de naturaleza constitucional y aplicado de manera equivocada el art. 167, apartado 2º, del código ritual; resultando asimismo arbitraria, por haberlos apartado sin resolver primero sobre el fondo de la cuestión (la declaración de extinción de la acción penal).

Por los motivos que enunciaron, indicaron que se ha menoscabado el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene la querella como víctima en el proceso penal, en la medida que las pretensiones de la AFIP en el presente caso se mantienen intactas.

En ese sentido, expresaron que el pago efectuado por la encausada Veron, no solo no se ajusta a las disposiciones que prevé expresamente la ley 27.541, sino que, además, no tiene ningún efecto jurídico penal, dado que los delitos aquí perseguidos, que tienen por base la ley 24.769, son de orden público e indisponible.





## *Cámara Federal de Casación Penal*

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

Asimismo, aseveraron que en la especie se ha lesionado el derecho de acceso a la justicia y la defensa en juicio.

En base a dichas consideraciones, solicitaron la revocación de la sentencia. Para finalizar, hicieron reserva del caso federal.

4. Durante el término de oficina previsto por los artículos 465, primera parte, y 466 del código adjetivo, se presentó el Dr. Javier Augusto De Luca, fiscal general ante esta cámara, quien, al emitir su opinión sobre el recurso de casación interpuesto por la AFIP, solicitó fundadamente que se le haga lugar. Para así dictaminar, expresó que la sentencia no se encuentra correctamente fundada en el derecho vigente, dado que no existe norma alguna que permita en este caso apartar al organismo recaudador de su rol de querellante. También sostuvo que el apartamiento resulta prematuro, debiendo el tribunal resolver en primer lugar la cuestión relacionada con la subsistencia de la acción penal. En esa dirección, concluyó que no es la insuficiencia del pago para reparar el bien jurídico en cuestión lo que legitima a la AFIP a continuar en su rol de querellante, sino el hecho que aún queda pendiente de análisis la naturaleza del pago y si este puede extinguir la acción penal.

5. Cumplidas las previsiones del art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación (ocasión en la que el recurrente presentó breves notas), la causa quedó en condiciones de ser resuelta (cfr. constancia digital de fecha 3 de mayo de 2023).

### **SEGUNDO:**



1. En cuanto a la admisibilidad formal que se me impone analizar en primer lugar, he de señalar que la presentación recursiva examinada reúne las exigencias que habilitan la intervención de esta instancia judicial superior. Ello es así, en la medida que la decisión recurrida en casación resulta equiparable a un pronunciamiento de carácter definitivo, por sus efectos, en virtud del agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior que le genera al recurrente (art. 456 del CPPN); los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos establecidos por el art. 456 del CPPN, y se han cumplido los requisitos de tempestividad y fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.

2. Afirmada, entonces, la procedencia formal de la presentación casatoria, y previo a ingresar al fondo del asunto, habré de resumir brevemente lo actuado en las presentes actuaciones.

Conforme surge del sistema de gestión judicial Lex 100, Gabina Sofía Verón y Nelson Alejandro Sánchez Anterino fueron elevados a juicio por su intervención como coautores del delito previsto y reprimido en el artículo 9 de la ley 24.769, en orden a la presunta omisión de depósito en tiempo y forma de los aportes previsionales previamente retenidos a los empleados en relación de dependencia de GILMER SA, por los siguientes períodos: 01/2011, 02/2011, 06/2011, 12/2011, 06/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 09/2013.

El presente incidente se originó como consecuencia del pedido de extinción de la acción penal, solicitado por las defensas de los imputados el 9 de mayo de 2022, en virtud de su acogimiento a la moratoria prevista por la ley 27.653. En





## *Cámara Federal de Casación Penal*

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

esa presentación, se informó que Verón, en carácter de responsable solidaria de GILMER SA, había saldado la totalidad de la deuda objeto de las presentes actuaciones y que la AFIP había aceptado el pago.

En oportunidad de contestar la vista que le fue conferida, el organismo recaudador se expresó en contra del pedido de la defensa. Para ello, señaló que los contribuyentes quebrados sin continuidad, como es el caso del deudor principal -GLIMBER SA-, se encontraban excluidos de la moratoria establecida en la ley 27.653 y que, por lo tanto, también lo estaban los deudores solidarios como Verón (art. 46 de la RG N° 5101/2021 y art.16 inc. "a" de la ley 27.541).

Frente a dicha postura, la fiscalía solicitó la fijación de una audiencia a los efectos de poder arribar a una solución alternativa que diera solución al conflicto entre las partes.

En la audiencia celebrada a tales fines, a la cual no pudo comparecer la querella, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, a su criterio, la deuda tributaria se encontraba saldada y que la postura de la AFIP resultaba contradictoria, dado que si bien había aceptado previamente el pago de la deuda, ahora se oponía a la extinción de la acción penal. De ese modo, al encontrarse saldado el perjuicio patrimonial y habiendo sido este aceptado por la damnificada, sugirió que se aplique al caso el art. 59, inc. "6", del CP -bajo determinadas condiciones- y que se extinga la acción penal.

Con posterioridad a esa audiencia, y en vistas de que se había realizado el pago del total de la deuda requerida por



el organismo recaudador relativo a los hechos aquí imputados, el tribunal consideró que se podría haber modificado la legitimidad procesal de la AFIP para continuar en el rol de querellante, y decidió correrle vista a las partes para que se expidan sobre esa cuestión.

En esa oportunidad la AFIP estimó que no correspondía modificación alguna en su carácter de querellante. Sostuvo que su legitimación procesal para actuar en juicio se mantenía a pesar de que el monto adeudado hubiera sido cancelado, por cuanto la actuación del organismo no persigue un mero objetivo recaudatorio, sino la defensa del erario público. Además, señaló que el apartamiento intentado lesiona derechos de índole constitucional, tales como la defensa en juicio y el debido proceso.

A su turno, la fiscalía consideró que no se encontraba legalmente prevista esa oportunidad procesal a efectos de evaluar la calidad de parte querellante del organismo recaudador (y su apartamiento como tal). Agregó que dicho organismo podía considerarse legitimado o mantener un interés legítimo, por lo que debía estarse a las resultas de lo dilucidado en la audiencia del 16 de agosto de 2022, donde se discutió, puntualmente, si la acción debía extinguirse por el pago realizado en los términos del art. 59, inc. 6, del CP.

Por su parte, la defensa de los imputados indicó que como la deuda que conforma el objeto procesal de estas actuaciones había sido enteramente saldada, el daño invocado por la AFIP para constituirse como querellante debía considerarse saldado y que, por lo tanto, debía ser apartada de dicho rol.





## Cámara Federal de Casación Penal

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

Finalmente, como señalé, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 -integrado de manera unipersonal- resolvió apartar a la AFIP de su rol de querellante.

Para fundar su decisión, el magistrado interviniente aclaró que *"no resulta correcto sostener que no se halle previsto legalmente revisar en todo momento la intervención de cualesquiera de las partes legitimadas en el proceso cuando el citado art. 167 del C.P.P. lo dispone en forma expresa"*.

Señaló que el hecho de que se haya acordado y aceptado un pago total acerca del daño sufrido por el titular del bien jurídico en cuestión, afectaba naturalmente la legitimidad procesal de la AFIP para continuar en su rol de querellante, *"pues su natural derecho ha sufrido una significativa variación que lo desacredita"*.

Hizo referencia a que el art. 1097 del anterior Código Civil disponía que, si se hacían convenios sobre el daño, se tendría por renunciada la acción criminal, y que a través de la interpretación de los artículos 1708 y sgtes. del nuevo Código Civil y Comercial se podía llegar a la misma conclusión.

En esa dirección, expresó que *"el art. 1720 dispone que el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad de la lesión de bienes disponibles"*. Por lo que, prosiguió, *"en ese caso ya no existe ofensa en el titular del respectivo bien jurídico. Va de suyo que la satisfacción del perjuicio económico en delitos tributarios por su propia naturaleza importa un resarcimiento que integra el daño"*.



*sufrido pues los respectivos montos adeudados integran su especial tipicidad (vgr. arts. 1 y 2 de la ley nro. 27.469)".*

*En ese sentido, dijo, "la querella no puede sostener que se encuentra ofendida por un delito de acción pública o que mantiene un interés directo legítimo en las resultas del caso con base en el art. 82 del C.P.P.N. cuando no sólo aceptó el resarcimiento económico del caso, sino que, incluso, fijó el monto del mismo para su depósito".*

*En sustento de su postura, hizo mención del antecedente "Esmede, Juan Osvaldo" de ese tribunal.*

**3.** Sentado cuanto precede, adelanto que el remedio procesal intentado habrá de prosperar por resultar aplicable al caso, *mutatis mutandis*, los fundamentos y las conclusiones expresadas por esta misma sala en la causa CPE 832/2015/T01/4/CFC4, caratulada "Esmede, Juan Osvaldo s/recurso de casación", resuelta el 21 de diciembre de 2022, registro nro. 1755.22.

En el mencionado precedente, proveniente del mismo tribunal *a quo* y utilizado para fundar el presente caso, el Dr. Riggi, voto al cual adherí, expresó que en el ordenamiento procesal vigente sólo corresponde la separación de la parte querellante legalmente constituida, a través de la correspondiente tramitación de una excepción de falta de acción (art. 339 y cc. del CPPN), ya sea porque la acción no fue debidamente promovida, o no puede ser proseguida o estuviera extinguida.

Dicho criterio, a su vez, es coincidente con el temperamento expuesto por quien suscribe al votar en las causas "Álvarez, Teodoro s/ recurso de casación" Nro. 12228, Reg. nro. 1827.12.4, rta. el 9 de octubre de 2012; "Almirón, Francisco Susano s/recurso de casación", Nro. 16.304, Reg.







## *Cámara Federal de Casación Penal*

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

nro. 1961.13.4, rta. el 16 de octubre de 2013; "Artacho, María Alejandra s/recurso de casación", CFP 10703/2011/4/CFC1, Reg. nro. 1969.18.4, rta. el 13 de diciembre de 2018 y "Murray, Juan Patricio s/recurso de casación" FRO 10647/2013/CFC1; Reg. nro. 1966.21.3, rta. el 10 de noviembre de 2021, entre otras.

En dichos precedentes, dejé sentada mi postura según la cual existiendo un pronunciamiento jurisdiccional firme que le reconoció la calidad de parte al acusador particular en el expediente, el órgano jurisdiccional de que se trate se encuentra imposibilitado para apartarlo de oficio, siendo el camino idóneo para tal fin a través de un pedido formulado por alguna de las partes y mediante el progreso de una excepción de falta de acción (arts. 339, 340 y cctes. del CPPN). Es que, desde mi óptica personal, el único supuesto que habilitaría - en su caso- el apartamiento oficioso sería si el querellante fuera procesado en la misma causa, circunstancia esta última que no se verifica en estos obrados (cfr. la autorizada opinión doctrinaria de Guillermo Rafael Navarro en "La querella", ed. Pensamiento Jurídico, Bs. As. 1981, págs. 149/55 y su actualización bajo el mismo título, ed. DIN, Bs. As., 1999, págs.142/3, coincidente con Francisco J. D'Albora, "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pág. 254).

Ahora bien, sin perjuicio de que el magistrado ha resuelto la separación de la querella sin respetar el trámite previsto para hacerlo (arts. 339 y cctes. del CPPN), es decir, sin disponer la formación del respectivo incidente a pedido de parte; al haber dado vista a los interesados para que se expidan sobre la cuestión, se ha respetado el contradictorio



que me habilita a emitir opinión sobre el fondo del asunto que viene cuestionando la AFIP.

4. Mediante el resolutorio recurrido, el magistrado del tribunal *a quo* decidió apartar a la AFIP de su rol de querellante en autos, por cuanto entendió que, en función del pago efectuado por la encausada Verón, en el caso ya no existe una ofensa en el titular del respectivo bien jurídico.

Para ello, como señalé, hizo referencia a que el art. 1097 del anterior Código Civil disponía que, si se hacían convenios sobre el daño, se tendría por renunciada la acción criminal, y que a través de la interpretación de los artículos 1708 y sgtes. del nuevo Código Civil y Comercial se podía llegar a la misma conclusión.

En primer lugar, cabe apuntar que la aludida analogía efectuada por el juez entre el art. 1097, *in fine*, del derogado Código Civil -Ley 340 y sus modificatorias- y los artículos 1708 y sgtes. del nuevo Código Civil y Comercial, no solo carece de sustento por no advertirse que el principio emanado del primero sea recogido en el segundo, sino porque tampoco bajo la vigencia del viejo Código Civil se hubiese podido allanar el camino para apartar del rol de querellante que la AFIP tiene en estas actuaciones, en razón del distinto alcance jurídico susceptible de ser otorgado a los desembolsos realizados por un determinado contribuyente (me remito a las consideraciones que, sobre esa cuestión puntual, tuve oportunidad de profundizar en el precedente CPE 1682/2012/2/CFC1, "KOGAN, Gustavo Daniel s/recurso de casación", rto. el 15/3/2016, Reg. N° 245.16.4).

Al respecto, resulta pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que no constituye un pronunciamiento válido aquel que trasunte una mecánica





## Cámara Federal de Casación Penal

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

aplicación de normas generales y desatienda la específica relación de estas con lo debatido en el proceso, careciendo de una adecuada ponderación de aspectos relevantes del caso (Fallos: 310:302; 320:2446, entre otros).

A ello ha de sumarse que, el injusto penal, a diferencia del injusto civil, debe ser restaurado en su ámbito funcional de generalización a través del tratamiento del suceso defraudatorio. En este sentido, la compensación del delito implica la restitución de la vigencia de la norma (cfr. voto del suscripto en causas CFP 7972/2014/1/CFC1, "NUÑEZ, Rene Eduardo s/recurso de casación, rta. el 4/5/2017, Reg. N° 456.17.4 y CFP 12474/2017/57/1/RH5/CFC10, KARAMANIAN, Sebastián Hugo s/recurso de casación", rta. el 29/9/2020, Reg. N° 1845.20.3).

En otros términos, la consecuencia que se deriva de la infracción a la norma es la búsqueda de la restitución de las condiciones de derecho, y esa es la única compensación material posible del daño para el ámbito penal.

Al respecto, tengo dicho que *"Un sistema penal funcional, orientado según el principio de la compensación de la culpabilidad por el hecho y que con ello pretende ser un genuino sistema jurídico penal, no puede entonces establecerse con relación al contenido del deber, sino sólo con relación al símbolo del deber mismo, esto es, con relación a la expectativa de que determinadas reglas elementales de relacionamiento sean obligatorias"* (cfr. Lesch, Heiko Hartmut: "El concepto de delito -Las ideas fundamentales de una revisión funcional-"; traducción de Juan Carlos Gemignani, Ed. Marcial Pons; Buenos Aires; 2016; p. 212).



En consecuencia, no encontrándose agotado el interés directo y singular del organismo recaudador -querellante legalmente constituido en autos- con el ingreso de las sumas dinerarias en concepto de obligación tributaria no abonadas en tiempo y forma a la hacienda pública, el criterio adoptado por el *a quo* no puede ser convalidado.

5. En suma, toda vez que lo decidido en la especie no solo se apartó de las normas procesales aplicables sino que carece de fundamentación suficiente en violación de las reglas contenidas en el artículo 123 del CPPN; propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación articulado por los apoderados de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, sin costas; casar la resolución recurrida y dejar sin efecto el apartamiento de dicha parte de su rol de querellante (arts. 530 y 531 del CPPN).

Así voto.

El señor **juez Daniel Antonio Petrone** dijo:

No advirtiéndose en el caso que se verifique alguna de las circunstancias contempladas por el ordenamiento ritual para proceder a la separación de la parte querellante legalmente constituida, habré de acompañar la solución propuesta por el doctor Juan Carlos Gemignani.

Es que el pago alegado en autos, no llega a refutar suficientemente la calidad de "particularmente ofendida" que se le hubiera reconocido a la AFIP en este proceso en los términos del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación y, consecuentemente, su legitimación para continuar actuando como parte querellante en el marco de la presente causa.

Así voto.

El señor **juez doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:





## *Cámara Federal de Casación Penal*

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

En atención a las circunstancias relevantes de caso que fueran reseñadas por el distinguido colega que lidera el Acuerdo, doctor Juan Carlos Gemignani -a las que me remito por razones de brevedad, corresponde señalar que el derecho a querellar se enmarca dentro de la garantía constitucional del debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8.1 de Convención Americana de Derechos Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), por lo que *"todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado"* (C.S.J.N., Fallos 268:266, entre otros).

Consecuentemente, el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación prescribe: *"Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este Código se establezcan"*.

Sobre el punto, he sostenido en reiteradas oportunidades que *"la expresión 'particularmente ofendido' abarca tanto al titular del bien jurídico que resulta lesionado por el obrar investigado -sujeto pasivo del delito-, como así también a quien resulte damnificado, por haber sufrido un perjuicio real y concreto que lo habilita para accionar"* (cf. mi voto en causas, Sala IV, n°11.439, "Macri,



Mauricio s/recurso de casación", reg. n°286/12, rta. el 14/03/2012; CFP 12063/2012/1/CFC1, "De Jauregui, Ignacio s/recurso de casación", reg. n° 238/15.4, rta. 2/03/2015; CFP 13345/2012/1/CFC1, "AFIP s/legajo de apelación", reg. n°774/2015.4, rta. 28/04/2015; CCC 66095/2013/1/1/CFC1 "Seidler, Aldo Emilio s/recurso de casación", reg. nro. 758/16.4, rta. 23/06/2016; CPE 921/2012/3/CFC1, "Bossio, Diego s/recurso de casación", Reg. nro. 883/16.4, rta. el 07/07/2016; CFP 10703/2011/CFC1, "Artacho, María Alejandra s/recurso de casación", Reg. nro. 1969/18, rta. 13/12/2018 -que se encuentran firmes- y sus citas, en lo pertinente y aplicable).

En el presente proceso, se investiga la posible comisión del delito tipificado en el artículo 9 de la ley 24.769 y sus modificatorias, esto es, la apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

En diversos precedentes sostuve que el delito que constituye el objeto procesal en las presentes actuaciones afecta la integridad de los recursos de la seguridad social y, por ello, el Estado es "particular ofendido" por tales conductas, en tanto es el titular de la Hacienda Pública (cfr. en lo pertinente y aplicable, voto del suscripto en fallos de la Sala IV de la C.F.C.P.: CFP 13345/2012/1/CFC1, "AFIP s/recurso de casación", Reg. nro. 774/2015 del 28/04/2015 y CFP 1432/2021/2/CFC1, "AFIP s/ recurso de casación", Reg. nro. 904/2021 del 22/06/2021; FGR 17826/2019/CFC1, "TECRAN S.A. s/recurso de casación", reg. n°486/22.4, rta. el 26/04/2022; y fallo de Sala III: causa CPE 832/2015/T01/4/CFC4, "Esmede, Juan Osvaldo s/recurso de casación", reg. n° 1755/22, rta. 21/12/22, entre otras).





## Cámara Federal de Casación Penal

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

En esa línea, respecto del Régimen Penal Tributario, he tenido oportunidad de sostener que *"...el bien jurídico tutelado por la norma es la Hacienda Pública en el sentido de preservar la percepción de los tributos, y su posterior reencauzamiento social (...) No se trata de un exclusivo propósito de recaudación, sino que se orienta a una meta de significativo contenido social cuya directriz es la sujeción a las leyes fiscales, como medio para que el Estado pueda cumplir sus fines de bien común"* (cf. Borinsky, Mariano Hernán; "Título III. Bien jurídico protegido y coerción penal" en *Fraude Fiscal. Un estudio histórico, comparado, de derecho penal, tributario, económico y sociológico*; ed. Didot, Buenos Aires, 2013, pág. 234).

Asimismo, y ya particularmente respecto de las figuras penales que buscan amparar los recursos del sistema de la seguridad social, apunté: *"Los delitos contra la seguridad social son delitos socioeconómicos que protegen un bien jurídico difuso del que son titulares todos los miembros de la sociedad y están enmarcados dentro de lo que se considera como delincuencia económica. El bien jurídico en el caso es la protección de expectativas de recaudación de los recursos de la seguridad social, en definitiva, al igual que el bien jurídico protegido en materia de fraude fiscal, se trata (...) de la actividad financiera del Estado"* (cf. Borinsky, Mariano Hernán; Turano, Pablo Nicolás; Rodríguez, Magdalena; y Schurjin Almenar, Daniel; "Capítulo V. Delitos relativos a los recursos de la seguridad social", en *Delitos tributarios y contra la seguridad social*; ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2020).



En suma, el bien jurídico protegido por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social (cf. artículo 9 de la ley 24.769 y sus modificatorias, aplicable al caso) no se limita exclusivamente al perjuicio patrimonial, sino que abarca también la sujeción a las leyes fiscales como medio para resguardar la Hacienda Pública en un sentido dinámico, esto es, la actividad financiera del Estado.

Por lo tanto, se evidencia que la recaudación por parte de la AFIP, mediante los pagos de fechas 22/04/2022 y 28/04/22 según constancias aportadas, de los conceptos cuya presunta apropiación indebida constituye el objeto del presente proceso, no desarticula por sí sola la calidad de "particularmente ofendida" que la AFIP reviste en las presentes actuaciones, en los términos del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Consecuentemente, en los mismos términos legales, se comprueba que la AFIP continúa siendo titular del derecho a ser tenida por parte querellante.

Ahora bien, la decisión recurrida se apartó de la solución que el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación prevé específicamente para el caso.

A tal fin, el pronunciamiento impugnado invocó lo prescripto por el artículo 1720 del Código Civil y Comercial de la Nación y sostuvo que debe interpretarse, análogamente a lo que antiguamente establecía el artículo 1097 del Código Civil, que la celebración de un acuerdo sobre el resarcimiento del daño importa la renuncia de la acción penal.

Al respecto, resulta indispensable recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido categórica en cuanto a que, donde la ley no distingue, no cabe hacerlo, pues si el legislador hubiera querido hacer distinciones, lejos de expresarse en términos generales,







## Cámara Federal de Casación Penal

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

hubiese hecho las salvedades o excepciones pertinentes (cfr. Fallos: 294:74; 330:2304; 333:735; 336:844; 337:567 y 342:1632, entre otros).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto de resalto que *"La interpretación de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción"* (cfr. Fallos: 303:578; 307:840; 310:937 y 2674 y 311:2223, entre otros).

En el presente caso, se advierte que la resolución recurrida ha interpretado que el ordenamiento civil prevé como consecuencia jurídica la renuncia de la acción penal cuando exista un acuerdo sobre el resarcimiento del daño, invocando para ello el artículo 1720 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya letra nada estipula al respecto. Por ende, a la luz de los referidos lineamientos exegéticos del Máximo Tribunal, se deduce que los argumentos dados en el pronunciamiento impugnado carecen de la debida fundamentación legal por no sustentarse en la literalidad de precepto normativo alguno.

En esa línea, la simple alusión al artículo 1097 del antiguo Código Civil, actualmente derogado, no basta para suplir la deficiencia de fundamentación señalada.

Adicionalmente, no debe soslayarse que la relación existente entre la AFIP y el encausado se inscribe en las normas y principios del derecho tributario, es decir, es una relación propia del Derecho Público, por lo que a fin de aplicar las previsiones del Derecho Privado debe brindarse un



adecuado basamento argumental, ausente -como ha sido expuesto- en la decisión impugnada.

Por otro lado, si bien el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal prevé la extinción de la acción penal para los supuestos de la conciliación y de la reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, de ello no se deriva que el pago de los conceptos adeudados en materia de aportes de la seguridad social implique el cese de "toda ofensa" de quien se presentara como querellante, como se asevera en el pronunciamiento impugnado.

En primer lugar, porque para que los institutos aludidos en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal surtan efectos jurídicos, deben ser debidamente instrumentados (cf., en lo pertinente y aplicable, mi voto en las causas CCC 25020/2015/T01/CFC1, "Villalobos, Gabriela Paola y otros s/defraudación", reg. n°1119/17, rta. el 29/08/2017; CFP 7245/2013/T01/2/CFC1, "Bobbio, Gerardo Andrés y otros por averiguación de delito", reg. n°1731/18.4, rta. el 14/11/2018; CFP 5471/2011/T01/CFC3, "Guarino, Gustavo Adrián s/estafa", reg. n°1960/19.4, rta. el 01/10/2019; CFP 14958/2017/CFC1 "Castiñeiras, Patricia Mariana s/recurso de casación", reg. n°2106/20.4, rta. el 23/10/2020, todas de la Sala IV de esta C.F.C.P.); extremo que no se constata en autos.

En segundo lugar, porque el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal normativiza sobre la acción penal, cuando la cuestión sometida a examen versa sobre el derecho de la AFIP de constituirse en parte querellante, esto es, en un sujeto del proceso.

Por lo tanto, se evidencia que el pronunciamiento recurrido abordó el caso a la luz de la normativa que regula





## *Cámara Federal de Casación Penal*

Sala III  
Causa CPE 1058/2015/T01/CFC6  
"VERÓN, Gabina Sofía y otro  
s/recurso de casación"

un aspecto del proceso penal (la acción penal) que resulta por definición diverso al sometido a estudio (el derecho a ser reputado como sujeto del proceso), sin brindar -ni apreciarse- fundamentos suficientes para justificar tal tesitura.

En tal contexto, la crítica formulada por la parte impugnante ante esta instancia evidencia que en este caso se configuró un supuesto de arbitrariedad de sentencia (cfr. C.S.J.N. Fallos: 331:1090; 331:583; entre muchos otros), en tanto la resolución impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las particulares constancias comprobadas de la causa y, en consecuencia, no puede ser considerada como acto jurisdiccional válido (cfr. en lo pertinente y aplicable voto del suscripto en las causas de esta Sala IV de la C.F.C.P.: FCR 18907/2019/2/CFC1, caratulada "BAZAN, Víctor Elbio s/recurso de casación", Reg. nro. 89/2022, rta. el 18/02/2022 y FCR 170/2019/CFC1, caratulada "VALDES, Pablo Gabriel s/recurso de casación", Reg. nro. 862/2022, rta. el 30/06/2022, entre muchas otras).

Por todo lo expresado, adhiero a la solución propiciada por el Dr. Juan Carlos Gemignani.

En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal  
**RESUELVE:**

**HACER LUGAR** al recurso de casación articulado por los apoderados de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, sin costas; **CASAR** la resolución recurrida y **DEJAR SIN EFECTO** el apartamiento de dicha parte de su rol de querellante (arts. 530 y 531 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN),



remítase al tribunal de origen mediante pase digital,  
sirviendo la presente de atenta nota de envío.

